

GUIA DE ESTUDIO: contenido básico Asignatura "Legislación".

Tema: "El Ingeniero como perito judicial: ambito, forma y contenido de la pericia. Pasos Procesales."

Autor: Dr. José Humberto Donati.

I.- Nociones generales sobre prueba. Importancia en el derecho y en el proceso. La prueba judicial.

La noción de prueba se halla presente en todas las manifestaciones de la vida humana. De ahí que exista una noción vulgar al lado de otra noción técnica y que aún esta varíe según la clase de ciencia de que se trate.

En la vida ordinaria las personas pretenden a diario probar hechos o circunstancias. Las más variadas ciencias necesitan de "pruebas" sobre sus afirmaciones y tesis; así el historiador, el sociólogo, el lingüista, el cronista, el arqueólogo, el químico, el botánico, el médico, todos se hallan sujetos a las más variadas técnicas y metodologías probatorias.

Pero si la noción literal del término significa "justificar, hacer patente la verdad de una cosa" (D.R.A.), con lo que tenemos una noción amplísima de operación de demostración, verificación de una realidad, posee un matiz donde es posible una mayor precisión conceptual. Nos referimos a las ciencias/reconstructivas, en particular la historia, y las ciencias // vinculadas con ella.

Así el historiador, el paleontólogo, el arqueólogo, el cronista precisan de la prueba para alcanzar cierto convencimiento sobre una realidad determinada del pasado que investigan. Convencimiento en primer lugar propio y luego destinado a sus lectores, críticos, la ciencia misma.

Algo muy semejante ocurre en el derecho. En su ámbito la prueba se utiliza para convencer al Juez de una realidad histórica -como hecho ocurrido en las relaciones humanas- que interesa afirmar para la satisfacción de algún derecho.

El jurista debe reconstruir el pasado para conocer quien tiene la razón en el presente o bien con la finalidad de regular las conductas futuras. En el primer caso se reconstruyen hechos o circunstancias determinadas por un conflicto de derecho y está destinado al juez; en el segundo se rehace o investiga el pasado o la realidad sociológica y se destina al legislador.

No es necesario resaltar la enorme importancia que la //

pericia dentro del proceso.
controversia → litigio.

vida jurídica otorga a las pruebas. Sin ellas no existirían los derechos en la práctica, no sería posible sistema judicial alguno y retrogradaríamos al sistema primitivo de justicia privada de todos contra todos.

Así se ha dicho que "el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas: detrás de él el enigma del pasado, y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba", "la prueba es el corazón del problema del juicio, del mismo modo que éste es el corazón del problema del pensamiento" (Carnelutti "La Prueba Civil" pág. 18).

Tanto para el docente, el estudioso del derecho, el abogado o el Juez la prueba viene a ser el complemento necesario de todo sus conocimientos, por que sin ella no podrá hacer efectivo ni su profesión ni sus fallos. De ahí la enorme importancia de que se imparta en sus estudios este conocimiento instrumental que, como veremos, alcanza no sólo a los profesionales del derecho, sino a todo otro profesional universitario que directa o indirectamente pueda estar vinculada a circunstancias jurídicas susceptibles de prueba, en particular el proceso judicial donde puede participar como auxiliar de la justicia, es decir como perito.

Es dable también recordar que si el derecho comprende un espectro muy amplio de ramas o áreas autónomas según su especificidad, así tradicionalmente los derechos civil y comercial, laboral, penal, administrativo, etc., la prueba es común a todos ellos. En todas las áreas existe como instrumento operativo del derecho, porque como se ha dicho "solamente la prueba vivifica el derecho y lo hace útil" (Planiol-Ripert "Tratado de D. Civil" t. VII pág. 747).

Qué debe entenderse por prueba judicial ?

El conjunto de normas y reglas que regulan el modo de reunir, presentar, utilizar y aún calificar las pruebas en un proceso judicial, contenidas en los códigos de procedimientos respectivos, permiten concebir -dada su complejidad y delimitación- una teoría general de la prueba a la cual no es necesario ingresar aquí. Basta pues definir a las pruebas judiciales como "el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos ^{que} interesan al proceso" (Devís Echandía "Teoría General de la Prueba" t. I pág. 15).

En otras palabras, todo proceso judicial comprende necesariamente etapas, momentos sucesivos; cuya estructura general comprende una primera etapa de planteamiento del conflicto, su determinación, precisión o limitación lógica; un segundo momento de prueba que a su vez se subdivide en el ofrecimiento de

los medios probatorios hasta su receptación por el juez, la producción de la prueba y su crítica específica, y por el último la incorporación de esa prueba. Posteriormente se abre una etapa deliberativa sobre el valor de esa prueba (alegatos, defensas etc.) y por último la culminación, o finición del proceso: el juicio del juez consistente en la reconstrucción histórica de la verdad de los hechos en cuestión para lo cual hace mérito de la prueba incorporada; convencido de la verdad de los hechos el Juez aplica el derecho como juicio lógico en que consiste la sentencia.

Dentro de todo proceso cualquiera de las partes así como los asiste el derecho inalienable de defenderse también, concomitantemente lo asiste el derecho a probar conforme las reglas establecidas para hacerlo.

II.- Conceptos jurídicos elementales e indispensables a todo profesional universitario sobre pruebas judiciales.

Conforme la noción que hemos dado más arriba de prueba judicial, es dable distinguir liminarmente tres aspectos diferenciales:

- a) La manifestación formal de la prueba: es decir los medios utilizados (oportunidad, forma, documentos, indicios, etc.) para llevarle al Juez el conocimiento de los hechos;
- b) Su contenido esencial: relacionado con el hecho mismo, es decir las razones o motivos que de esos medios se deducen en favor de la existencia o inexistencia de los hechos; y
- c) Su resultado convictivo: es decir el convencimiento que con ellas se trata de producir en la mente del juzgador quien concluye si hay o no prueba de determinados hechos.

En el mismo sentido y al fin de precisar conceptos elementales puede sintetizarse la clasificación anterior en la diferencia existente entre "prueba" y "medio de prueba"; esto es las razones o motivos que sirven para llevar al Juez la certeza sobre los hechos por un lado como "prueba" y, por otro, como "medios de prueba" los elementos o instrumentos utilizados por las partes y el propio juez para obtener la prueba.

Esta distinción, para nada ociosa, se relaciona con el derecho subjetivo de probar que todo particular tiene como hemos señalado más arriba; derecho sin el cual los derechos en general serían impracticables.

Sujeto pasivo de ese derecho es el Juez en el proceso quien está obligado a acoger y practicar las pruebas pedidas con las formalidades legales en tanto sean admisibles. Por lo tanto, como afirma Devis Echandía "el derecho de probar no tiene por objeto convencer al Juez sobre la verdad del hecho afirmado, es decir, no es un derecho a que el Juez se convenga en presencia

de ciertos medios de prueba, sino a que acepte y practique las peticiones o presentadas por las partes y las tenga en cuenta en la sentencia o decisión" (ob.cit. pág. 37).

Algunos principios generales de la prueba judicial.

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado principios generales indiscutibles en materia de prueba judicial, que resultan como pautas orientadoras, faros que iluminan el razonamiento sobre circunstancias de dudas e discrepancias. Veremos enunciativa y someramente algunas de ellas; suelen enumerarse no menos de treinta:

- Principio de la necesidad de la prueba y prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Es decir los hechos deben estar demostrados en el proceso (expediente) aportados por las partes o por el Juez, pero éste no puede suplirlo por su conocimiento privado de tales hechos como consecuencia de los principios generales de publicidad y contradicción del proceso mismo.
- Principio de unidad. Significa que si bien aportada por diversas partes y de diversos medios, el conjunto probatorio del proceso conforma una unidad y que como tal debe ser apreciado por el Juez.
- Principio de comunidad o adquisición. Derivado del anterior significa que una vez aportada la prueba no pertenece a quien la aportó sino al proceso mismo y que es improcedente que sólo beneficie a aquél que la aportó. Así ocurre con frecuencia que un medio probatorio ofrecido por una parte beneficie a la contraparte porque su resultado es adverso al proponente.
- Principio del interés público de la función de la prueba.
- Principio de lealtad, probidad o veracidad de la prueba: no debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad, para inducir al Juez a engaño.
- Principio de contradicción de la prueba. Significa que las partes pueden controlar la prueba ofrecida por su adversario, oponerse y discutir su admisibilidad.
- Principios de igualdad de oportunidad de la prueba; de publicidad de legitimación etc.
- Principio de preclusión de la prueba. La expresión "precluire" es un término eminentemente procesal que significa que concluida una etapa procesal no vuelve a repetirse o reabrirse. En consecuencia se trata de la oportunidad o tiempo de practicar la diligencia probatoria etc.

Pueden agregarse enunciativamente tambien los principios de inmutación y dirección del juez en la producción de la prueba; de libertad probatoria, originalidad de la prueba, de concentración probatoria, de pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba; principio de carga de la prueba y de autorresponsabilidad de las partes en su ofrecimiento y producción, etc.

Dentro de estas nociones básicas, conviene precisar siquiera sea sucintamente qué debe ser probado en un proceso, qué es en definitiva el objeto de la prueba judicial.

Puede afirmarse sencillamente que objeto de prueba judicial son los hechos discutidos, aquellos sobre los que recaen las afirmaciones y negaciones que hace a la dialéctica de las partes, de modo que como dice Canclutti se trata de "la demostración de la verdad de un hecho realizada por medios legales (por modos legítimos) o, más brevemente, la demostración de la verdad legal de un hecho" (ob. cit. pág. 44).

III.- Los diversos medios probatorios. Breve noción de los principales. LA PRUEBA PERICIAL.

Como hemos señalado los medios o "fuentes" probatorias no son sino las modalidades, formas, medios, gracias a los cuales se logra la prueba buscada o se fracaza en el intento. Suele distinguirse el medio estereotipado (confesional, testimonio, documento, etc.), del medio concreto (el absolvente, el testigo, el contrato). Nos referimos aquí a la primera acepción.

Los medios de prueba más conocidos son los revisados en los códigos procesales -evitamos aquí la consideración sobre su libertad o taxatividad- pudiendo mencionarse principalmente los siguientes:

Declaración de parte y prueba de confesión.

El testimonio de terceros

Inspección o reconocimiento judicial

Prueba por documentos

Prueba por Indicios

Peritación o Prueba por peritos.

Daremos una breve noción de cada uno de los primeros para detenernos al final en la peritación.

1. Declaración de parte o prueba de confesión.

Se trata de la declaración emitida por cualquiera de las partes del juicio respecto de la verdad de los hechos, relativo a su actuación personal, desfavorable para ella y favorable para la otra parte. Es la prueba de las pruebas puesto que permite en general

prescindir de otros medios. Existe el adagio según el cual "a confesión de parte relevo de prueba" que significa precisamente la definitividad probatoria de este medio.

No corresponde a la extensión del trabajo considerar los diversos modos como se puede producir esta prueba. En el proceso civil normalmente las partes ofrecen la declaración de su contraparte / interrogándolas sobre los hechos en forma conminatoria y bajo juramento, resultando obligatoria su respuesta. En el proceso penal normalmente puede darse en la indagatoria que resultando ser un medio defensivo por excoepción no excluye la posibilidad de la / confesión del imputado.

2. El testimonio de tercero.

Medio probatorio muy conocido consistente en llamar a terceros extraños al juicio para que viertan expresamente en él la representación histórica de lo sucedido según su percepción o conocimiento sensible. Obviamente debe tratarse de personas físicas, extrañas a las partes y al órgano judicial, en las que la legislación procesal trata de preservar su objetividad, imparcialidad y fidelidad al testimonio debido.

3. Inspección o reconocimiento judicial.

Se trata de una diligencia procesal practicada por un funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación por sus propios sentidos de hechos ocurridos durante la diligencia o antes pero que subsisten, o rastros o huellas de hechos pasados y en ocasiones de su reconstrucción. Puede realizarlo un oficial público por orden judicial o bien el propio Juez.

4. Prueba por documentos.

Enseña Carnelutti que mientras la confesión, el testimonio son el resultado de una actividad humana en sí mismo representativos del hecho testimoniado, el acto que crea el documento no es representativo del hecho narrado en éste sino que se limita a crear el vehículo de representación que es el documento mismo. Es documento toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y el tacto que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera (Devis Echeandía ob.cit. t.II p. 486). Por ejemplo: escritos, planes, fotografías, pudiendo ser declarativo-representativo cuando contenga una declaración como un contrato, una escritura.

5. Indicios.

Un hecho desconocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de una operación lógico-crítica basada en normas generales de la exacta o en principios científicos.

IV.- PRUEBA PERICIAL. Nociones generales. Elementos. Requisitos. Diferencia con otros medios probatorios.

Como es obvio en la verificación de hechos litigiosos se presenta la más variada gama de circunstancias, determinación de causas o efectos en la trama fáctica. Para ello resultan indispensables conocimientos especiales, técnicos, ajenos al saber específicamente jurídico del Juez. Es por ello que aparece la necesidad de que éste sea auxiliado en la apreciación de ese tipo de hechos por especialistas en determinada ciencia, industria, oficio, arte o actividad, a quienes se denomina peritos.

Se ha definido como "aquella prueba que es suministrada por un tercero, a raíz de un encargo judicial, y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o prácticos que poseen, comunican al Juez las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su dictamen" (Palacio "Derecho Procesal Civil" t. IV pág. 674).

De tal modo la actividad del perito está dirigida a la producción de un dictamen u opinión fundada sobre aquello sobre lo cual se le consulta, por lo que es dable distinguir grados de opinabilidad. Bien puede tratarse de la mera verificación de un hecho (por ejemplo la extensión catastral de un lindero por parte de un agrimensor) en cuyo caso debe limitarse a expedirse asertivamente sobre lo comprobado; o bien puede consistir en la enunciación de los juicios o deducciones técnicas arribadas luego del examen de los hechos de que se trate (por ejemplo, la autenticidad de la firma de un documento) o de sus causas o efectos (por ejemplo origen de una enfermedad y sus consecuencias).

Requisitos

Seguendo a Palacio L.N. en su obra citada puede encuadrarse en aspectos A) Subjetivos, B) Objetivos y C) De lugar tiempo y forma.

Subjetivos: comprende al órgano judicial (Juez o Tribunal) por ser el destinatario de la pericia como asimismo puede ser su promotor; las partes que proponen este medio probatorio en la estación oportuna y el perito o los peritos que en definitiva se designen.

Objetivos: refiere al examen de la idoneidad del medio probatorio conforme dos subrequisitos, que se refiera a hechos controvertidos o cuya dilucidación requiera al Juez para resolver y que por ello se además conducente, es decir útil al fin específico del juicio. Por otra parte se señala que sea jurídicamente posible, no prohibido por las leyes, contrario a la moral. Tampoco son procedentes objetivamente las pericias sobre cuestiones simples, sobre apreciación

ciones jurídicas o sobre el cuerpo humano cuando el sujeto se niegue a ser examinado.

De tiempo, lugar y forma. El tiempo oportuno para la producción de la prueba es la etapa procesal probatoria según el tipo de juicio de que se trate. Puede excepcionalmente practicarse como medida preliminar si las circunstancias del caso lo justifican, por ejemplo por la posible desaparición del cuerpo peritado. Pero incluso puede ser posterior a dicha etapa si lo dispone oficiosamente el Juez, incluso con posterioridad al llamamiento de ~~apostado~~ para sentencia.

El lugar se verifica por lo común en el designado o acordado por los propios peritos. Se trata de una cuestión puntual pendiente del caso específico. El dictamen lógicamente debe ser presentado en el Juzgado o Tribunal correspondiente.

En cuanto a la forma presenta dos aspectos, por un lado las operaciones científicas, técnicas, prácticas que puede realizar el perito en su investigación, regidas por reglas propias de su oficio, arte o profesión. Por otra la forma específicamente procesal es la relativa al dictamen que debe vertir sujeto a ciertas formalidades normalmente por escrito o idioma nacional, efectuando su presentación, un breve resumen de su objeto pericial, la exposición de los interrogantes a que se lo someten y su puntual respuesta, detallada y fundada en las operaciones técnicas específicas realizadas, con las conclusiones generales, especiales o finales que correspondan según cada caso.

Se ha dicho que el perito es un testigo calificado. Sin embargo tiene otras diferencias con el testigo. Por un lado el testimonio refiere a hechos del pasado, la pericia puede versar sobre cuestiones actuales (la subsistencia de una enfermedad por ejemplo); también mientras el testigo realiza apreciaciones sobre hechos ocurridos fuera del control procesal el perito lo hace sobre hechos percibidos en ocasión del proceso. El testigo nunca debe afectar juicio o vertir opiniones, el perito por el contrario funda sus conclusiones en base a su opinión científica. El testigo nunca es remunerado, el perito por el contrario recibe honorarios. Por último mientras el testigo es insustituible en cuanto tal, el perito si, puede perfectamente ser llamado y reemplazado en su tarea.

V.- Deberes y derechos del perito judicial.

Es necesario aclarar primeramente que resulta diversa la situación del perito según el proceso de que se trate: civil, penal, la boral etc.

Deberes:

1. En los procesos civiles en general el deber del perito es

ción pericial no resulta una carga u obligación pública, como si puede suceder en el proceso penal; además, cabe distinguir los peritos oficiales -que forman parte del propio poder judicial cuya labor es remunerada por el Estado- de aquellos designados en profesiones particulares.

En el proceso civil el perito puede rehusarse a aceptar el cargo para el que fue designado, pero una vez que lo acepta nace el deber de desempeñarlo fiel y lealmente, siendo pasible de lo contrario a sanciones de cuño múltiple: civiles, penales y procesales.

De modo que el deber fundamental del perito una vez aceptado el cargo es su desempeño correcto, atendido a las reglas del procedimiento de tipo formal y temporal cuanto a las reglas del arte que debe aplicar en forma específica en su trabajo.

Sanciones: todos los códigos procesales contienen diversas medidas disciplinarias. Analizaremos brevemente las concernientes al orden nacional (proceso civil de la nación aplicable en nuestro medio en los llamados Tribunales Federales); y al provincial conforme el procedimiento civil y el penal.

En el orden nacional el art. 470 del Código de procedimientos civiles establece que será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez de oficio nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios".

Entre nosotros el art. 189 del Código de Procedimientos Civiles establece: "Los peritos están obligados a aceptar el nombramiento si tienen título en la ciencia, arte o industria de que se trate o la ejercen profesionalmente. Podrán rehusar su aceptación por las mismas razones que los testigos pueden rehusar su declaración. Si dentro de los tres días de ser notificados, no aceptaren el cargo o lo rehusaron sin causa debidamente fundada, serán de oficio eliminados de la lista de nombramientos respectiva, no incluidos en la correspondiente al año siguiente y pasibles de multa de hasta veinte días multa (ley 9273)".

Esta disposición permite efectuar ciertas precisiones indispensables de aclaración.

Por un lado la obligación a que refiere el artículo está referida a aquellos peritos que forman parte de las listas oficiales abiertas anualmente por el poder judicial donde se inscriben aquellos que se postulan. De suerte que tal postulación los obliga a

aceptar el cargo pues de lo contrario se prestaría a la especulación de aceptar sólo cuando el monto económico lo beneficie. Pero por el contrario aquellos peritos propuestos por cuya especialidad no haya listas en el Poder Judicial, pueden rehусar libremente.

En cuanto a los primeros de cualquier modo pueden hacerlo cuando por las mismas razones por las que los testigos pueden negarse a declarar. Tal circunstancia lo regula el art. 218 del mismo código y se trata de casos en que se compromete el honor del perito o pueda exponerse a enjuiciamiento criminal, si no pudiera responder sin revelar secretos científicos, artísticos o industriales o bien causales objetivas que impedieran la objetividad de su tarea prudencialmente apreciada por el Juez.

Por último en cuanto al proceso penal se establece "art. 275 Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuvieren un grave impedimento. En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Juez al ser notificado de la designación. El perito que sin alegar excusa fundada, dejare de acudir al llamado del Juez o se negare a presentar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos. Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento".

Por lo que corresponde a las sanciones penales los peritos se hallan sujetos a los arts. 243, 256, 265 y 275 del Código Penal; es decir pueden incurrir en desobediencia (243); cohecho (256); negociaciones incompatibles con la función pública (265) y falso testimonio (275).

Derechos:

Se señalan como los principales derechos los siguientes:

a) Tienen derecho a requerir en ciertos casos un adelanto en concepto de gastos que pueda insumir la diligencia, actividad, estudio etc. que deben realizar. Tratándose de peritos no oficiales una vez cumplido acabadamente su cometido tienen derecho a que se les regulen honorarios y percibirlos.

Entre nosotros la nueva ley orgánica del poder judicial de la Provincia de Santa Fe al regular en el Título V del Libro Quinto los "Peritos Auxiliares de la Justicia" en su art. 522 establece: "Honorarios Profesionales: Los contadores públicos, ingenieros, traductores, calígrafos, tasadores y demás peritos auxiliares de la Justicia no contemplados expresamente en este Título, se cobrarán para el cobro de sus servicios prestados en juicio, a las normas generales y aranceles fijados para los abogados y procuradores por la ley 6767 (aranceles de abogados) o la que la sustituya. En ningún caso el perito en juicio devengará honorarios que superen el 50% de los que se regulen al curial de la parte vencedora, ni...

tarias de su profesión. Cuando la labor del perito deba realizarse sobre objetos extraños al litigio mismo, pero cuya verificación haya sido necesaria para resolverlo, los Tribunales podrán apartarse del límite local, para mantener una relación adecuada con la tarea efectivamente realizada por el experto y con el valor de esos otros bienes".

b) Poseo además los derechos inherentes a su función y relativos al cumplimiento de la pericia. En tal sentido tiene el derecho de exigir cooperación de los litigantes tal como lo señala el art. 196 del C.P.C.C. de Santa Fe, sancionándose al remiso si se trata de una cuestión común con estarse a las afirmaciones de su contrario o bien, si interesa al orden público, obligarlo compulsivamente a aquello que se quiera: por ejemplo exhibir algún objeto o documentación, etc.

VI.- Procedimiento Pericial. Panorama del ejercicio profesional como perito. Requisitos para hacerlo en los procesos judiciales.

Si bien nuestro tema debe restringirse a la peritación judicial propiamente dicha, ello no impide hacer breve referencia al amplio panorama que tiene el profesional en su especialidad para efectuar pericias de diversas índole.

No resulta extraño la contratación de empresas respecto de peritos ingenieros sobre todo para la investigación de las causas técnicas de la producción de ciertos accidentes con relevancia jurídica ruinosa para ellas. Así por ejemplo, expertos en mecánica sobre las causas de accidentes automovilísticos, aéreos etc. Igualmente vale recordar el interés de las compañías de seguro respecto de los llamados accidentólogos, normalmente ingenieros, físicos u otros profesionales que aportan extrajudicialmente su opinión a fin de estimar los riesgos de un juicio. Se trata del perito consultor, experto en ciertas áreas con incidencia en problemas jurídicos que se quieren avertir.

Igualmente puede ocurrir que el perito se convierta en árbitro en determinadas circunstancias cuando su opinión técnica va unida a su probidad en cuya virtud las partes suelen someterse a su veredicto como perito y como árbitro final de sus conflictos. De tal modo que en suplantar al juez en su discernimiento de derecho con las limitaciones que establece el art. 416 del CPCC.

Para hacerlo ya en los procesos judiciales, la ley local establece (art. 521 de la ley orgánica P.J. 10.160) "Requisitos: Las funciones de inventariadores, tasadores, traductores, calígrafos y demás peritos auxiliares de la Justicia, serán ejercidas, salvo acuerdo de parte, por personas que posean título habilitante de

pedidos por establecimientos oficiales de la Nación o de las // provincias, mayoría y buena conducta. Los Acuerdos departes / respecto a su designación tendrán validez mientras las leyes no lo restrinjan, limiten o prohiban. En caso de no existir peritos matriculados, podrán ser designados idóneos en la materia".

Esto significa precisar los requisitos generales para la integración de las listas oficiales de peritos conformadas anualmente por el poder judicial de la Provincia en cada una de sus / jurisdicciones. A ellas cabe presentarse con los requisitos requeridos: documentos personales, certificación de buena conducta, el título habilitante debidamente legalizado en original y copia, prestar fianza ofreciendo un fiador -generalmente un colega profesional-.

Las listas suelen distribuirse entre la Secretaría de la Suprema Corte o las diversas Cámaras existentes según los profesionales que por el uso ancestral comprendan.

Respecto de los idóneos en la materia su designación no depende de ninguna lista oficial sino que corresponde a las partes proponerlos o bien puede el Juez acudir a algún tipo de agrupamiento que los congrege solicitando un listado de personas con tales requisitos.

VII.- El Procedimiento Probatorio Pericial. Diversos supuestos.

Analizaremos por separado el procedimiento ya específicamente judicial de las pericias. Esto es el perito actuando en un proceso por un lado civil y por otro penal, comprendiendo lo relativo al procedimiento local.

El Proceso Civil

El Código de Procedimientos Civil y Comercial de Santa Fe prevé el "Dictamen Pericial" la Sección VII del Título I del Libro Segundo, en los arts. 186 a 199.

Comienza señalando que el dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare o lo creyere necesario el Juez.

De modo que contiene la descripción clásica de las fuentes o modos en que puede incitarse este tipo de medio probatorio. Es obvio que las partes pueden proponerlo una sola, ambas o todas si son más. No es frecuente que el Juez lo ordene oficiosamente pero sí puede intervenir en el interrogatorio ampliando el cuestionario que las partes presenten.

Prevee de inmediato el código los dos tipos de conformación subjetiva del órgano auxiliar de peritos, ya sea colegiado, formado por tres especialistas o bien unipersonal. Corresponde al Juez decidir si serán 3 o uno según el valor del asunto; tratándose de un asunto de poco valor el Juez está facultado a reducirlo a sólo uno. Es muy frecuente el perito único.

Señala el código que los peritos serán designados por los litigantes de común acuerdo o por el Juez. Lo corriente es la última de las modalidades. La forma de designarlo es por sorteo de la lista oficial cuyo fin se eleva un oficio peticionando a la Cámara o a la Corte Suprema tal diligencia.

El modo de proponer peritos es procesalmente según la etapa probatoria de que se trate según el proceso de que se trate. Como es sabido hay trámites breves (juicio sumarísimo), menos breves (sumarios) y el ordinario o común más extenso, amplio, encontrándose además el juicio oral. En todos los casos existe una etapa de ofrecimiento de prueba. Es decir el momento en que las partes hacen saber al Juez de qué medios probatorios habrán de valerse para acreditar la verdad de sus afirmaciones. Al Juez corresponde proveer dicho ofrecimiento, es decir tomar los recaudos para el diligenciamiento, la realización de esas pruebas. Ofrecida pues una prueba pericial, corresponde al juez la designación del perito según hemos visto. En esa oportunidad además el Juez debe precisar los puntos a que debe contrársele, convocando a las partes a una audiencia para la designación del mismo, fijando plazo para dictaminar. Puede ocurrir además que el Juez amplie el interrogatorio, los puntos y las preguntas que las partes establecieron en el ofrecimiento. Normalmente el proveído se limita a designar la audiencia y tener por puntos de pericia los propuestos por las partes.

Señala el art. 188 que si las partes no comparecieron a la audiencia o lo hicieron una sola o no se pusieron de acuerdo, el Juez nombrará de oficio el perito. Tal es lo que ocurre normalmente debiendo acudir a la lista oficial según el orden de colocación en la nómina.

Se establece que una vez designado perito estos tendrán derecho a excusarse por los motivos que hemos señalado más arriba, de lo contrario tienen obligación de aceptar el cargo dentro de los tres días de ser notificados ante el Secretario del Juzgado bajo apercibimiento de ser removidos de la lista respectiva. Ya hemos señalado este aspecto al transcribir el art. 189 del Código.

La cédula notificatoria deben transcribir al pie el aludido art. 189 y el 194 en cuya virtud si no se presentare la pericia

en el plazo establecido serán reemplazados, excluidos de oficio de la lista de ese año y del siguiente aplicándoseles una multa de / hasta 20 días multa (ley 9273).

Pueden ser recusados por las mismas causales por las cuales pueden serlo los jueces, es decir el art. 10 en sus 11 incisos del mismo código todos relativos a causales que harían presumir parcialidad.

Realizadas estas designaciones el o los peritos deben aceptar el cargo ante el Actuario (Secretario) bajo juramento o afirmación de desempeñarlo legalmente. Si no compareciere se designará otro.

Designado el o los peritos y aceptado el o los cargos se abre una instancia de estudio, consideración y desenlace pericial. Establece el código que si por la naturaleza del objeto a peritar fuere factible expedirse en el acto de la designación o aceptación lo harán, es decir acto continuo en audiencia pública. Sin embargo esto no se verifica con frecuencia. De hecho una vez aceptado el cargo se solicita normalmente fondo para la realización o gastos de los trabajos respectivos que, una vez depositados abren la instancia de estudio y examen que culmina con el dictamen que resulta ser el acto central de la tarea.

El dictamen

Señala el art. 193 respecto de la primera parte que los peritos practicarán unidos en caso de ser tres las diligencias si no hubiere razón especial para lo contrario, pudiendo asistir a ellas los litigantes y hacer las observaciones que creyeren necesarias, por sí o por delegados técnicos, pero debiendo retirarse cuando aquellas pasen a disentir o deliberar.

Concluidas estas diligencias investigativas se emite el dictamen. Al respecto dice el mismo artículo que será dado por escrito, con copia para las partes dentro del término fijado y se presentarán tantos como sean las opiniones diversas, pudiendo el juez ordenar que se aclare, amplio.

Tal formalidad consiste concretamente en un escrito de cunio judicial en que el profesional se dirige al Juez, presentandose como tal con su identificación personal, nombre, domicilio, carácter (perito), mencionando los autos (juicio) en que actúa y el objeto de su presentación (presentar dictamen pericial).

Hechas estas liminares formalidades de rigor, pasará a señalar los puntos de pericia, es decir el tema, razón, motivos por el que fue convocado y preguntas que se le formulan. Describirá luego las diligencias investigativas realizadas, sus estudios, estimaciones, referencias, ecuaciones técnicas, información y

45.-
bada, cálculos, mérito, etc. y la respuesta concreta a cada interrogante con carácter conclusivo. Es decir una conclusión definitiva en su opinión a la pregunta dirigida.

Dado que los puntos de pericia pueden variar de uno a una gran cantidad, el orden, claridad, discriminación y exposición ordenada es fundamental en la calidad de la pericia. No se excluye la posibilidad de presentar cuadros, planos, gráficos, fotografías, o cualquier otro elemento fundante de la opinión técnica vertida.

Se concluye el escrito solicitando al Juez que tenga por cumplida su obligación procesal de presentar la pericia y que se regulen sus honorarios respectivos.

Puede suceder y sucede con gran frecuencia que las partes cuestionen o impugnen la pericia, o bien que se requieran explicaciones, aclaraciones, ampliaciones. A tal efecto el Juez será quien decida en definitiva acceder a la petición de las partes. Normalmente se fija una audiencia donde el perito deberá exponer aclarando los aspectos dudosos o poco claros.

Señala por último el art. 199 que el juez no está obligado a seguir el dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su criterio. Sin embargo esta afirmación no quiere significar que el Juez pueda obrar a su antojo, la desconsideración de una prueba cualquiera decisiva puede ser motivo de recurrimento de la sentencia por arbitrariedad, pues el juez se debe a la razonabilidad de su juicio. Así por ejemplo ocurre con ciertas pericias que resultan decisivas en sí mismas, tales como las pericias caligráficas sobre firmas de documentos decisivos para el pleito.

El Proceso Penal

Como es sabido el proceso penal cuenta con dos etapas diferenciadas sea cual fuere la gravedad de los delitos: una etapa instructoria -relativa a la colecta probatoria- y otra plenaria, donde el debate es más amplio, garantido y decisivo.

El Código de Procedimientos Penales regula este medio en Capítulo IX del Título II arts. 273 a 286. En líneas generales no existen grandes diferencias con el proceso civil. Salvo en lo relativo al rol más decisivo del Juez. Es fundamentalmente este quien ordena el examen pericial, aún de oficio, debiendo recaer la designación en peritos oficiales ~~//~~ de existir éstos. El caso más frecuente es la designación de médicos forenses en tareas típicamente periciales de alta calidad profesional. Sin embargo, dado que las partes es corriente que intervengan como actores y demandados civiles dentro de este proceso, pueden y suelen con frecuencia ofrecer peritos, máximo en casos de accidentes de tránsito donde actúan con frecuencia ingenieros mecánicos, licenciados en física etc.

También en estos casos tienen obligación de aceptar o

pero variando la sanción. Se asila a la de los testigos los cu los en caso de renu ciancia podrán ser traídos por la fuerza pú- blica y ser arrestados hasta definir su situación.

El dictamen puede expedirse por escrito o verbalmente en audiencia pública bajo acta, comprendiendo en cuanto fuera posible: 1) La descripción de la persona o cosa examinada, tal como hubieron sido hallados, asegurando en su caso la identidad digitopulgar de la primera; 2) una relación detallada de las operaciones que se rea lizaron y de su resultado y 3) las conclusiones que formule con- firme a los principios de su ciencia, arte o técnica.

Señala el art. 285 que el Perito debe guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su trabajo y que su incumplimiento lo hará incurrir en la responsabilidad de los que violan se- cretos.

